IPyPP UP
INSTITUTO DE PENSAMIENTO y POLITICAS PUBLICAS

Gobernar sin pueblo, la fórmula del poder

Proscripción y Ajuste

Julio 2025

- Un gobierno sostenido por la especulación financiera y la represión política
- La ilegalización de la oposición, la abstención electoral y el intento de consolidar de un sistema sin alternativas
- Una arquitectura regresiva en tensión: lo que está en juego

Equipo de Trabajo: Claudio Lozano, Agustina Haimovich, Alejando López Mieres, Ana Rameri y Mariana Rivolta.

ipypp.org.ar

I. Un gobierno sostenido por la especulación financiera y la represión política

Introducción: una desinflación que representa un orden de precios regresivo

Todo proceso de contención de la inflación supone la institucionalización de un nuevo orden de precios relativos. No hay programa antiinflacionario que no organice relaciones entre sectores, valoraciones entre bienes, jerarquías distributivas y estructuras de costos. En otras palabras, desacelerar la inflación no es solo bajar un índice, sino redefinir las reglas del funcionamiento económico.

En la Argentina de 2025, el gobierno ha impulsado un programa de desinflación que se presenta como técnico y neutral, pero que en verdad establece un nuevo régimen de precios profundamente regresivo. Lo que se desacelera es la inflación en pesos, mientras se intensifica una inflación estructural medida en dólares. El tipo de cambio oficial se mantiene planchado, el peso se aprecia en términos reales, y se impone una lógica que reordena los precios internos subordinándolos al objetivo de valorización financiera. El resultado es una aparente estabilidad nominal, que esconde un desacomodamiento profundo del sistema económico.

Esta inflación en dólares —oculta tras la desinflación estadística en pesos— afecta de forma directa a la estructura productiva. Promueve el aumento del turismo emisivo, la expansión de las importaciones, el repliegue de la industria nacional, y una caída sostenida del empleo formal. La moneda estable no es una señal de confianza, sino un instrumento de disciplinamiento que permite sostener la rentabilidad del capital especulativo a costa de una creciente destrucción de capacidades productivas.

El resultado es la erosión de la competitividad, se destruyen empresas, y el déficit de cuenta corriente se agrava. Para sostener esta inconsistencia, el gobierno recurre a un endeudamiento creciente en dólares, lo que convierte a la política antiinflacionaria en una estrategia de posposición: frena la nominalidad hoy a cambio de mayor fragilidad estructural mañana.

Este informe hace un repaso de los múltiples aspectos de esta reconfiguración: el tipo de anclas utilizadas, los mecanismos financieros desplegados, los costos sociales de la estabilización y la redefinición autoritaria del sistema político que busca garantizar su continuidad.

Una coyuntura económica signada por inconsistencias

El gobierno nacional atraviesa un momento de extrema fragilidad económica, aunque a primera vista busque sostener una apariencia de orden y previsibilidad macro. Esta paradoja —una estabilidad nominal montada sobre fundamentos endebles y crecientes señales de deterioro— configura el núcleo contradictorio del experimento en curso. La pretendida “normalización” no es otra cosa que una arquitectura artificial sostenida por endeudamiento, postergaciones y represión de los conflictos sociales. A medida que las variables reales se deterioran, la tensión entre el relato de éxito y la dinámica material del ajuste se vuelve cada vez más evidente.

La inflación de mayo —1,5 % mensual— ha sido presentada como una victoria del programa, pero su composición revela que no fue el resultado de una estrategia virtuosa sino el efecto combinado de tres anclas deliberadas: la cambiaria (dólar oficial estable con fuerte intervención encubierta), la salarial (represión nominal del ingreso) y, en mayo particularmente se sumó un ancla tarifaria (postergación de aumentos de tarifas y transporte). A esto se le combinó una fuerte caída en precios estacionales como verduras (–2,7 %), que terminó de empujar a la baja el índice general en el mes de mayo. El dato de inflación núcleo del 2,2 %, de todos modos, ya anticipa que el proceso de desaceleración encuentra su techo, y en junio las proyecciones[1] confirman una reversión de la tendencia.

Esta "tranquilidad nominal" tiene un costo económico y social creciente. Si bien la actividad económica rebotó en abril, compensando la caída de marzo, hay sectores que aún se ubican muy por debajo del nivel que tenían en abril 2023 (la industria -9,5% y la construcción -11,5%), al tiempo que el consumo masivo continúa deprimido. Las ventas en supermercados siguen por debajo de los niveles previos a este gobierno[2], y en mayo y junio incluso cayeron según Scentia un -10% y un -12,5% interanual, respectivamente. Por lo tanto, el repunte del consumo durante marzo-abril respecto al mes anterior promovido por el uso de las tarjetas de crédito pudo poner una pausa pero no alcanzó para revertir la tendencia. Mientras el porcentaje de financiación de las compras vía tarjeta de crédito fue del 36% en promedio para todo el período enero 2017-noviembre 2023, esta incidencia aumentó 8 puntos en los últimos 17 meses al llegar al 44%, valor en ascenso que trepa en abril al pico del 46,3%.

En el segundo trimestre de este año, según el relevamiento de Moiguer, mientras los segmentos medio-bajos tienen dificultad para afrontar gastos -un 50% no llega a fin de mes y un 30% resigna gastos para pagar servicios-, los segmentos medios-altos expanden su consumo en dólares. El consumo de bienes durables y semi-durables—electrodomésticos, autos, inmuebles, indumentaria— creció en el último año un 56,5% según el relevamiento realizado por la consulta PxQ mientras los no durables -alimentos y bebidas, principalmente- cayeron un 3,8%, lo que configura una economía a dos velocidades: recuperación segmentada para sectores de mayores ingresos, estancamiento y ajuste para las mayorías.

La situación del empleo refleja crudamente esta desigualdad estructural. A pesar de que el PBI es 3 % más alto que un año atrás, la desocupación llegó al 8 % y hay más de 240.000 personas sin trabajo adicionales respecto de 2023. Es decir: la aparente estabilidad macro de este modelo no genera ni empleo ni mejora del ingreso. Por el contrario, se destruye empleo formal al tiempo que crece la precariedad laboral[3]. El crecimiento es extractivo, concentrado y excluyente.

A esto se suma un costo financiero creciente que pone en una situación de extrema fragilidad el frente externo. En los últimos seis meses, el gobierno contrajo deuda externa por al menos USD 19.557 millones. Los instrumentos incluyen:

- un desembolso del FMI por USD 12.000 millones (abril),

[1] La consultora Equilibra, que suele aproximarse a las estimaciones oficiales, proyecta para el mes de junio una tasa mensual de inflación del 2%.

[2] Según la Encuesta a Supermercados del INDEC, el mes de abril 2025 se encuentra 6% por debajo de noviembre de 2023.

[3] Ver IPyPP (junio 2025): Más desocupación, menos empleo y más informalidad. Los resultados del Mercado Laboral al 1er trimestre 2025. www.ipypp.org.ar

- USD 2.000 millones por un repo con bancos internacionales en enero y otros USD 2.000 en junio,
- colocaciones de Bonte 2030 por USD 1.500 millones (mayo-junio)[4],
- más USD 1.500 millones del Banco Mundial y USD 500 millones del BID.

Esta toma de deuda responde a la necesidad de cubrir vencimientos (el 9/07 debe afrontar un pago superior a los USD 4.000 millones de los bonos Globales y Bonares) y reforzar reservas internacionales ante la resistencia del Gobierno de comprar divisas durante, paradójicamente, el trimestre más prolífico por la liquidación de la cosecha gruesa. La alarma se agrava al considerar que el trimestre siguiente cuenta con un potencial de liquidación menor proveniente del agronegocio, una mayor demanda de dólares por turismo (vacaciones de invierno) y una tendencia a la dolarización de cartera a medida que se acercan las elecciones de medio término.

En paralelo, la deuda en pesos experimenta un crecimiento acelerado y estructuralmente riesgoso. A partir de junio, el Tesoro anunció la eliminación de las LEFI (Letras Fiscales de Liquidez) como instrumento de regulación monetaria, lo que derivaría esa liquidez hacia otros instrumentos financieros del Tesoro como las LECAP o los Boncap consolidando un régimen de financiamiento del Tesoro basado en capitalización de intereses y altos rendimientos en pesos. Aunque ambas son emisiones del Tesoro, las LEFI funcionaban como la tasa de referencia para el sistema bancario. Su eliminación modifica la operatoria de política monetaria: ya no hay una tasa de referencia explícita fijada por el BCRA, sino que la tasa de corte de las LECAP —definida por el mercado— pasa a orientar el resto del sistema financiero, subordinando la política monetaria a las condiciones del capital especulativo.

El cambio inducirá volatilidad en el gasto público total, ya que la tasa de interés de las LECAP la definirá el mismo mercado -pudiendo en BCRA intervenir en los mercados secundarios- lo que podrá derivar en un aumento del déficit financiero. Solo hasta mayo, las LECAP acumularon intereses capitalizados por $23,4 billones (2,7 % del PBI), una cifra superior al presupuesto anual destinado a las jubilaciones por moratoria ($16 billones) y casi equivalente al total de prestaciones del régimen de reparto ($27 billones). Esta maniobra permitió presentar un superávit financiero artificialmente inflado, ya que esos intereses aún no devengados no figuran como gasto corriente, pero se transformarán en deuda exigible en el corto plazo. En paralelo, las tasas reales mensuales de 1,5 % a 2 % que ofrecen las alimentan un circuito de carry trade que canaliza pesos hacia instrumentos financieros desconectados de la economía real.

La pretendida “calma cambiaria” que se observó hasta junio —con una brecha de apenas el 2 % entre el dólar oficial y el financiero— no es resultado de la liberalización del mercado, sino de una estrategia deliberada de represión de la demanda. En primer lugar, el Tesoro dejó de comprar dólares en el mercado oficial para no presionar el tipo de cambio. Además, el cepo para

[4] El Bonte 2030 es un instrumento paradigmático en la estrategia financiera del gobierno para resolver tensiones a corto plazo, aunque genera desequilibrios en el mediano y largo plazo. Es un bono a 5 años que se suscribe exclusivamente en dólares por inversores extranjeros y se pagará en pesos al vencimiento, con pagos semestrales de interés y capital al final del plazo. La tasa estipulada significa un costo elevado para el Tesoro (equivalente a una tasa efectiva anual del 31,68%), y al mismo tiempo implica una tasa implícita en dólares cercana al 9 % anual si se descuentan expectativas inflacionarias en pesos y tipo de cambio estable que incluso sería aún mayor en el marco de las pronósticos optimistas del Gobierno.

empresas sigue vigente, lo que restringe las operaciones de importación y pago de deuda externa privada. A esto se suma una actividad económica estancada, que modera la demanda estructural de divisas. Sobre esa base, el BCRA desplegó intervenciones activas: además de continuar interviniendo en los mercados del dólar financiero, en mayo vendió USD 1.500 millones en contratos de dólar futuro, acumulando una posición vendida de casi USD 1.946 millones, lo que logró contener momentáneamente las expectativas devaluatorias.

Pese a estos mecanismos, el país no alcanzó la meta de reservas netas comprometida con el FMI, registrando un déficit de más de USD 4.000 millones a fines de junio. Por esta razón, el Fondo concedió una prórroga y aún se evalúa la posibilidad de un *waiver* que, de ser aprobado, habilitaría un desembolso adicional de USD 2.000 millones. En este contexto, el discurso oficial que insiste en que "no se emite" resulta insostenible: en mayo, el BCRA realizó una transferencia de utilidades al Tesoro, y además la cobertura de los contratos de dólar futuro implica compromisos que se pagan en pesos, por lo que la emisión monetaria no desaparece, sino que se difiere y se encubre bajo otras formas.

Pero la generación de dólares genuinos se vuelve también cada vez más esquiva ya que el drenaje de dólares es más acelerado que la apuesta del Gobierno por el yacimiento de hidrocarburo más productivo que disponemos. A mayo, las importaciones crecieron 34,3 % mientras las exportaciones apenas 2,6 %, lo que recortó el superávit comercial un 80 % respecto de 2024. En realidad, la balanza comercial total de los primeros 5 meses del año está sostenida exclusivamente por el superávit energético promovido por la producción de Vaca Muerta (cercano a los +USD 3.000 millones), mientras el resto de la economía acumuló un déficit de aproximadamente USD 1.200 millones.

En mayo, la Cuenta Corriente del Balance Cambiario del BCRA volvió a mostrar un resultado negativo, acumulando -UDS 12.271 millones en los 12 meses consecutivos de déficit (US $4.800 millones solamente en lo que va del año 2025). Es decir, que desde hace un año que el esquema de política económica resigna USD 1.000 millones por mes.

Según los últimos datos del Balance Cambiario, el superávit comercial de bienes se amplió en mayo hasta alcanzar USD 1.800 millones, impulsado por una mejora en las exportaciones, que crecieron significativamente tras la eliminación del esquema "blend". Mayo fue el primer mes completo sin ese incentivo, lo que aceleró la liquidación del agro. Sin embargo, el saldo acumulado de bienes en los primeros cinco meses del año alcanzó apenas USD 3.800 millones, una cifra que representa solo una cuarta parte del superávit registrado en igual período de 2024 (USD 14.800 millones), debido al fuerte incremento de las importaciones.

El frente más crítico, sin embargo, fue el de servicios, que volvió a mostrar un déficit severo, especialmente en el rubro de turismo emisivo, cuyos niveles se acercan a los de los años pico 2017–2018. En lo que va de 2025 (enero–mayo), la cuenta de servicios muestra un rojo de USD 5.100 millones, de los cuales un abrumador 88 % (USD 4.500 millones) corresponde a gastos por viajes al exterior. Este componente deteriora fuertemente el balance de divisas y refleja el impacto de un tipo de cambio apreciado sobre el patrón de consumo externo de los sectores de mayores ingresos.

Los pagos de intereses netos[5] al exterior acumulan USD 15.700 millones desde el mes de diciembre de 2023 hasta mayo 2025, valor prácticamente equivalente a los USD 15.900 millones

[5] Consolidado del sector público y privado.

de la balanza de bienes y servicios dando cuenta, por otra parte, de la enorme carga de servicios de deuda externa que tiene nuestro país que se convierte en prácticamente una aspiradora de los recursos de la balanza comercial. Más aún, tal exigencia sobre el balance de divisas se irá recrudeciendo en el tiempo en tanto la deuda es el bastión principal de este modelo financiero.

El **superávit comercial de bienes** acumulado en los primeros cinco meses del año fue de **USD 3.863 millones**, **insuficiente para cubrir un volumen de egresos que alcanzó los USD 22.000 millones**, distribuidos del siguiente modo:

- Déficit de servicios: USD -5.123 millones
- Pago de intereses (sector público y privado): USD -3.512 millones
- Remisión de utilidades e IED neta negativa: USD -1.680 millones
- Fuga de capitales (formación de activos externos): USD -5.650 millones -de los cuales, usd 5.300 millones se concentraron en abril y mayo tras la salida del cepo para personas humanas-
- Intervención en los dólares financieros (MEP/CCL): USD -2.318 millones
- Pago de deuda pública (capital): USD -3.641 millones

El saldo resultante se sostuvo a través de la **ampliación del endeudamiento por USD 20.340 millones**, distribuido principalmente en:

- FMI y organismos internacionales: +USD 14.340 millones
- Préstamos privados y colocación de bonos soberanos (BONTE, Repo, etc.): +USD 6.000 millones

Uno de los fenómenos más destacados del período fue la fuerte aceleración en la formación de activos externos del sector privado no financiero, que alcanzó un total de USD 3.226 millones solo en mayo, luego de la eliminación del cepo cambiario para personas físicas en abril. De ese total, USD 1.954 millones fueron compras netas de billetes (efectivo físico), y USD 1.526 millones correspondieron a transferencias en divisas. El número de personas que accedió al mercado para comprar dólares también se disparó: más de un millón de personas compraron billetes en mayo, mientras que aproximadamente 524.000 las vendieron, según el BCRA. Esto implica no solo un salto en el volumen de operaciones, sino también una ampliación de la base de actores dolarizadores, fenómeno que impactó directamente en la caída de reservas.

En este contexto de crisis de divisas, la estrategia oficial de eliminar el “parking” de 180 días para inversores no residentes se trata de atraer capitales especulativos a cualquier costo, flexibilizando aún más las condiciones para que fondos del exterior entren, hagan carry y salgan sin restricciones. Una política de puertas abiertas para flujos financieros volátiles que convierte a la economía argentina en un casino de corto plazo. No por casualidad, el retiro de JP Morgan y la venta masiva de posiciones por parte de PIMCO por más de USD 1.000 millones en junio, marcan un punto de inflexión: el mercado huele la inestabilidad estructural del programa y empieza a retirarse. Una paz cambiaria que en las últimas semanas se vio seriamente amenazada ante el descrédito del propio mercado financiero internacional, reflejado en la advertencia de JP Morgan para “dar un paso al costado” en bonos en pesos debido al riesgo electoral y al fin de la estacionalidad agrícola Esa pérdida de confianza se tradujo en una corrección del dólar oficial

(subió cerca de 3 % entre viernes y martes, de $1.205 a $ 1.237) y la caída de la bolsa porteña y ADRs, que retrocedieron más del 5 % en una sola jornada tras el fallo judicial contra YPF.

En síntesis, la pretendida estabilidad se sostiene en una combinación de:

- Desindustrialización, bajos niveles de actividad, represión del salario y el gasto social,
- endeudamiento agresivo (externo y en pesos),
- represión de la demanda divisas por parte del Tesoro y de las empresas
- y la intervención directa del BCRA en el mercado financiero y en dólar futuro.

Una arquitectura de pinzas que parece convertirse en estrangulamiento porque requiere de una fuente permanente de divisas que difícilmente pueda conseguirse. Primero se consumió todo el superávit comercial (USD 17.800 millones), luego los dólares del blanqueo (USD 20.000 millones), y ahora el endeudamiento externo (de USD 20.000 millones en la primera parte del año) que, ante un riesgo país sostenido en niveles altos, puede resultar a un costo muy alto.

De esta manera, los planes de estabilidad oficiales basados principalmente en una paz cambiaria se va transformando en un panorama cada vez más incierto y cercano a la volatilidad. Donde hace tiempo no hay paz es en el plano social, que necesita cada vez más coerción política y judicial para sobrevivir. La pregunta que se impone es si esta fragilidad estructural no explica también la ofensiva institucional contra la principal dirigente opositora.

II. La ilegalización de la oposición, la abstención electoral y el intento de consolidar de un sistema sin alternativas

Marco General

La proscripción de Cristina Fernández de Kirchner aparece como la necesidad del poder de disciplinar judicialmente al sistema político tradicional en un marco de creciente fragilidad del régimen económico vigente. Frente a un modelo que no logra estabilizarse socialmente, que no puede construir consenso ni garantizar resultados sostenibles, el disciplinamiento se convierte en condición para la continuidad del programa.

En las primeras siete elecciones locales celebradas hasta ahora en el año, se manifestó con crudeza la crisis de representación política a través de la consolidación de un ausentismo récord funcional al oficialismo. Es decir, fue funcional al crecimiento institucional de La Libertad Avanza, que se expandió en representación sin construir mayorías. En casi todos los casos, la contienda se vació de contenido social. Rosario, la octava, fue la excepción con el triunfo de una alianza político-social que incluyó al peronismo pero también a otras fuerzas populares. Sin embargo, incluso allí se mantuvo alta la abstención, lo que indica que la desconexión entre la ciudadanía y el sistema electoral se profundiza en todo el país.

En este clima, **la irrupción de Cristina como candidata a senadora por la tercera sección electoral de Buenos Aires —el corazón del conurbano peronista con más de cinco millones de votantes— modificó radicalmente el escenario político. La tercera sección concentra una densidad demográfica, simbólica y electoral clave para el peronismo. Al momento de su**

lanzamiento, la derecha no contaba con una figura competitiva para enfrentarla en ese territorio, y aun si el oficialismo perdía la provincia, Cristina podía emerger como la opositora más votada del país, proyectando volumen político hacia 2027. En ese contexto, su presencia alteraba el cuadro institucional que venían moldeando la abstención y la fragmentación.

Por eso se volvió un problema. Su candidatura ponía en cuestión el sistema de poder edificado sobre el vaciamiento institucional y la licuación del conflicto social, y su eventual triunfo —aun acotado a un distrito— podía reactivar una oposición política de peso. **La respuesta no fue electoral, sino judicial**. El fallo que ratificó su proscripción no puede desvincularse de esta amenaza, del mismo modo que el fallo de la jueza Loretta Preska en Nueva York contra la República Argentina por la estatización de YPF —con foco directo sobre Axel Kicillof— también actúa como parte de una estrategia de disciplinamiento político y descabezamiento de la oposición.

Si el ausentismo se consolida como patrón y la candidata con mayor densidad electoral en vastos sectores del conurbano bonaerense es excluida de forma anticipada, el sistema electoral argentino amenaza con transformarse en una farsa institucional, en una arquitectura democrática vaciada de contenido representativo.

Queda por verse, todavía, qué ocurrirá cuando se celebren las elecciones nacionales ya que el desdoblamiento de las elecciones locales —pensado originalmente como estrategia para evitar arrastre— terminó debilitando aún más la centralidad del voto, alimentando la percepción de que en cada distrito no se define nada de fondo, y reforzando el desapego de amplias franjas de la población.

Ilegalización, abstención y el intento de barrer alternativas

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de confirmar la proscripción política de Cristina Fernández de Kirchner no puede leerse aisladamente. No es un hecho puntual del ámbito jurídico, sino un movimiento central en la reconfiguración del sistema político en tiempos de disciplinamiento económico extremo. En un contexto donde el programa del gobierno se sostiene sobre una combinación de represión social, desposesión económica y endeudamiento vertiginoso, la exclusión de la principal referente opositora expresa la necesidad del poder económico y judicial de consolidar un marco institucional donde la única oposición tolerable sea aquella que no cuestione el rumbo estructural del modelo.

La operación política y judicial sobre Cristina Fernández no es nueva. Pero lo que cambia en esta coyuntura es que la ofensiva se convierte en requisito del orden, no solo en revancha ideológica. Es decir, el gobierno necesita sostener un programa de reformas regresivas en un contexto donde no logra respaldo popular, ni consenso electoral ni solvencia macroeconómica. En esa ecuación, la eliminación de una oposición efectiva se vuelve funcional a garantizar una transición controlada ante la alta probabilidad de fracaso.

Este movimiento revela que el sistema político está siendo reconfigurado para garantizar continuidad del rumbo económico aun ante la caída del actual gobierno. La exclusión de CFK, incluso como candidata a senadora por la tercera sección electoral, representa mucho más que una disputa jurídica. Es el intento de consolidar un campo político donde las alternativas sean admisibles solo si no alteran el orden macroeconómico impuesto: equilibrio fiscal a cualquier

costo, apertura comercial, endeudamiento en divisas, anulación del poder sindical, extranjerización productiva. La proscripción es un mensaje: no hay lugar para quienes representen una amenaza a esa hoja de ruta.

Por ende, la jugada judicial no puede entenderse sin vincularla a la extrema fragilidad del programa económico. El reciente retiro de JP Morgan y PIMCO del carry trade, el agotamiento de las reservas netas, la deuda externa creciente, un perfil de vencimientos de deuda particularmente crítico a partir de 2026 (USD 20.000 millones por año), la dependencia total de la renta energética y el vaciamiento del mercado interno configuran un modelo con altísimas chances de crisis o default antes del final del mandato. **En este sentido, el poder económico —que no desconoce esta debilidad— necesita un marco político que le garantice continuidad del rumbo incluso si el experimento Milei fracasa**.

Esta ofensiva no es un hecho aislado, sino parte de un proceso más amplio de vaciamiento de la democracia argentina en la cual la soberanía popular no define el rumbo, y las elecciones se convierten en mecanismos de validación residual de una arquitectura de poder preexistente en el cual el gobierno festeja victorias que lo convierten en una primera minoría sin legitimidad popular.

Mientras el programa económico amplía la desigualdad y las privaciones, el sistema político que lo respalda comienza a mostrar otro síntoma de deterioro democrático: **el crecimiento sostenido de la abstención electoral**. Las ocho elecciones provinciales y municipales realizadas hasta el momento, incluida la de Rosario, exhiben una tendencia persistente: amplios sectores sociales se alejan de las urnas, ya no por apatía circunstancial, sino como forma de rechazo o pérdida de confianza en los mecanismos de representación. La baja participación se ha convertido en el signo más visible del ciclo político posterior a 2023.

Comparativo elecciones provinciales 2021-2025: concurrencia

Provincia	Fecha	2021	2025	Dif
Santa Fe PASO *	13-abr	65%	55,40%	-9,6 pp
Chaco	11-may	66,0%	52,0%	-14 pp
Jujuy		70,5%	65,0%	-5,5 pp
Salta		64,0%	59,0%	-5 pp
San Luis		77,5%	65,0%	-12,5 pp
CABA	18-may	66%	53,35%	-12,65 pp
Misiones	8-jun	59,5%	55,5%	-4 pp
*Santa Fe Generales**	29-jun	65%	52%	-13pp
Formosa		68%	65,8%	-2,2pp

** Promedio de los votos en todos los departamentos en 2021*

@SalinasPabloJ

Fuente: Elaboración de Pablo Salinas, consultor político y docente de la UBA

Este alejamiento, sin embargo, no emerge como un fenómeno nuevo. La crisis de representación venía gestándose desde antes, aunque en 2023 logró canalizarse parcialmente a través del voto a Javier Milei, que ofreció una salida institucional a una parte del malestar social. Hoy ese canal parece obstruido porque el descontento actual con la situación económica y social se traduce también en el descrédito sobre los candidatos oficiales locales e impiden reproducir el efecto de representación que había tenido Milei en la elección nacional de hace dos años.

En este sentido, la baja participación electoral en las últimas ocho elecciones muestra con claridad el vaciamiento de la política electoral. **Rosario** no fue una excepción a la abstención —que también fue elevada—, pero sí lo fue en cuanto al resultado político-electoral: allí, **un armado diverso y plural logró imponerse con una propuesta con arraigo popular y propuesta alternativa**. Ese espacio, que se expresó inicialmente como Rosario sin miedo, luego como Santa Fe sin miedo y finalmente como la alianza Más para Santa Fe, surgió de la confluencia de Ciudad Futura, Unidad Popular y Patria Grande, a los que se sumaron luego el Movimiento Evita, experiencias sindicales, culturales y territoriales, y sectores del Partido Justicialista santafesino, aunque sin constituir su fracción dominante. Esta organización construyó una alternativa programática y estructural, que logró canalizar parte del descontento social hacia formas institucionales con arraigo real. Su intervención no fue testimonial ni improvisada, sino el resultado de una estrategia de largo aliento, basada en la territorialidad, la organización comunitaria y la disputa cultural.

Pero en el resto de mapa argentino la situación es crítica. **La democracia argentina se desangra entre un gobierno sostenido por la deuda y la represión, una Corte que opera como garante del orden económico, y una oposición política amenazada o clausurada**. La pregunta urgente es si será posible revertir este proceso desde abajo, reconstruyendo formas de representación, participación y movilización que puedan reabrir el la disputa por el poder político institucional allí donde el sistema busca cancelarlo.

III. Una arquitectura regresiva en tensión: lo que está en juego

El gobierno de Javier Milei ha logrado, en sus primeros seis meses, consolidar una arquitectura de estabilización regresiva: contención de precios a través de la represión salarial; ancla cambiaria sostenida por endeudamiento; superávit primario fundado en la licuación del gasto social y el ocultamiento de intereses de deuda; atracción de capitales especulativos mediante desregulación financiera y desmonte normativo. Esta arquitectura le ha dado al oficialismo un margen de gobernabilidad económica en el corto plazo, pero al costo de erosionar aceleradamente el tejido social, las capacidades del Estado y la legitimidad democrática del régimen.

Esta estabilidad es frágil, transitoria y vulnerable a múltiples frentes simultáneos:

- En el plano externo, la dependencia del financiamiento condiciona la soberanía económica. La combinación de repos, Bonte y FMI permite transitar los próximos meses, pero deja al país atado a flujos financieros inciertos y caros.
- En el frente interno, la política de “cero emisión” se financia con deuda y genera una bomba de intereses futuros que acumula tensiones sin resolverlas.
- La pax cambiaria es sostenida a través de intervenciones que agotan reservas netas, incluso mientras se proclama libertad cambiaria.
- La estabilidad nominal no detiene el retroceso real del empleo, el consumo masivo, la inversión productiva y la integración territorial.

A esto se suma una estrategia institucional de disciplinamiento político y judicial: **la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner revela que no se busca gobernar con legitimidad popular,**

sino asegurar la continuidad de un rumbo económico sin oposición. En este esquema, el sistema político es reconfigurado para ser funcional a los intereses del poder económico, aun a costa de vaciar la democracia de contenido sustantivo. El ajuste, sin contrapoder, es la condición estructural de esta etapa.

Pero el deterioro tiene efectos más amplios. La crisis de representación es hoy el principal obstáculo para la recomposición de una alternativa. La abstención creciente, incluso en elecciones de fuerte disputa territorial como la de Rosario, muestra que la desconexión entre política institucional y sociedad está llegando a un punto de quiebre. **La democracia electoral sobrevive como ritual, pero pierde capacidad de canalización del conflicto social**. La mayoría social afectada por el ajuste aún no encuentra cauce político estable, y el sistema parece diseñado para impedir que lo encuentre.

Por eso, el interrogante de fondo no es solo si el programa económico puede sostenerse, sino qué forma política necesita ese programa para no ser derrotado. El actual gobierno no se apoya en un bloque de poder amplio ni en una coalición social estructurada: se sostiene por la convergencia entre poder financiero, judicial y mediático. Y ese andamiaje no admite oposición con capacidad de gobernar. La proscripción, la represión, la concentración mediática y la inercia parlamentaria son piezas de una estrategia que busca gobernar sin conflicto, incluso si eso implica gobernar sin pueblo.

Sin embargo, la legitimidad popular no ha sido derrotada, sino desplazada. En Rosario se activaron formas de construcción política que combinan programa, territorio, organización y deseo colectivo. La clave está en comprender que la posibilidad de revertir el rumbo actual no vendrá de una oferta electoral espontánea, sino de una reconstrucción estratégica del campo popular, con arraigo, acumulación y sentido.

El momento actual no es solo un impasse: es un punto de bifurcación. **El programa de Milei puede volver a fracasar (porque ya ocurrió pero fue salvado por el Gobierno de Estados Unidos a cargo de Donald Trump, a través del FMI) pero lo que debe comprenderse es que su fracaso no garantiza la aparición de una alternativa**. Lo que está en juego es si esa alternativa será construida, por quienes y cómo. El poder económico ya tiene un plan para ese escenario que es consolidar una arquitectura de continuidad sin legitimidad, con sistema político clausurado (es decir, una farsa institucional) y economía de enclave. La pregunta es si desde los márgenes, los territorios y las experiencias en disputa, podrá articularse otra cosa.

Porque si la economía se estabiliza sobre la exclusión, y la política se reconfigura para eliminar el conflicto, lo que está en juego no es sólo el rumbo del país, sino el propio sentido de lo común. Y eso, todavía, puede ser disputado.